Bogotá, Septiembre 04 de 2014

**Informe de PONENCIA PARA PRIMER DEBATE al Proyecto de Acto Legislativo Nº 008 de 2014 Cámara “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 258 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA” acumulado con el Proyecto de Acto Legislativo Nº 038 de 2014 “POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL VOTO OBLIGATORIO EN COLOMBIA”**

Doctor

**JAIME BUENAHORA FEBRES**

**Presidente Comisión Primera**

H. Cámara de Representantes

Ciudad

Señor Presidente.

De acuerdo a la honrosa designación de la Mesa Directiva de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes, y de acuerdo a lo previsto en los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 5ª de 1992, me permito rendir informe de ***PONENCIA POSITIVA PARA PRIMER DEBATE*** al Proyecto de Acto Legislativo Nº 008 de 2014 Cámara “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 258 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA” acumulado con el Proyecto de Acto Legislativo Nº 038 de 2014 “POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL VOTO OBLIGATORIO EN COLOMBIA**”,** en los siguientes términos:

Atentamente,

**HERIBERTO SANABRIA ASTUDILLO CARLOS EDWARD OSORIO AGUIAR**

**Coordinador Ponente Coordinador Ponente**

**MIGUEL ANGEL PINTO CARLOS ABRAHAM JIMENEZ LOPEZ**

**Coordinador Ponente Coordinador Ponente**

**ALVARO HERNAN PRADA A. ANGELICA LISBETH LOZANO CORREA**

**Ponente Ponente**

**CARLOS GERMAN NAVAS TALERO FERNANDO DE LA PEÑA MARQUEZ**

**Ponente Ponente**

**JOSE RODOLFO PEREZ SUAREZ**

**Ponente**

**TRAMITE DEL PROYECTO**

**Origen**  Parlamentario

**Autores Proyecto de Acto Legislativo Nº 008 de 2014 Cámara “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 258 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA”:** H.R. - ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA, H. R. - ALONSO JOSE DEL RIO CABARCAS, H. R. - ANA MARIA RINCON HERRERA, H. R. - CARLOS EDWARD OSORIO AGUIAR, H. R. - CRISTOBAL RODRIGUEZ HERNANDEZ, H. R. - CHRISTIAN JOSE MORENO VILLAMIZAR, H. R. - JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, H. R. - NICOLÁS DANIEL GUERRERO MONTAÑO

**Fecha de Radicación**: 20 de Julio de 2014

**Publicado en la Gaceta:** 364 de 2014

**Autores Proyecto de Acto Legislativo Nº 038 de 2014 “POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL VOTO OBLIGATORIO EN COLOMBIA** H. R. - , DAVID ALEJANDRO BARGUIL ASSIS, H. R. - GERMAN ALCIDES BLANCO ALVAREZ, H. R. - HERIBERTO SANABRIA ASTUDILLO, H. R. - JOSE ELVER HERNANDEZ CASAS, H. R. - JUAN CARLOS RIVERA PEÑA, H. R. - LUIS HORACIO GALLON ARANGO, H. R. - MAURICIO SALAZAR PELAEZ , H. R. - NICOLAS ALBEIRO ECHEVERRY ALVARAN, H. R. - ORLANDO GUERRA DE LA ROSA, H. R. - OSCAR FERNANDO BRAVO REALPE

**Fecha de Radicación**: 20 de Julio de 2014 22 de Julio de 2014

**Publicado en la Gaceta:** 381 de 2014

**SINTESIS DEL PROYECTO**

1. **El Voto y su Historia.**

La Constitución de 1811, fue mezcla de normas democráticas, monárquicas, principios éticos y de comprendio patriótico. La Constitución prohibía la reforma del sistema electoral indirecto, pero a pesar de esto las reformas a la misma no tardaron en llegar, en 1812 se cambian algunas normas como las de los periodos constitucionales. El Sistema Electoral presentaba cambios y se estableció el sufragio para los mayores de 21 años inscritos en las listas cívicas.

En 1821 se expidió la Nueva Constitución de la Gran Colombia, la cual manifestaba: (…) “La soberanía reside esencialmente en la Nación y su Gobierno será representativo”, “El territorio de la República se dividirá en Departamentos, estos en provincias y estas en cantones y parroquias”[[1]](#footnote-1). (…) “El Presidente de la República estará asesorado por un Consejero de Gobierno compuesto de Vice-Presidente y Secretario de Despacho. Todos éstos nombramientos radicarán en cabeza de las Asambleas Electorales designadas por los cantones, quienes nombraran a los Representantes, Senadores, Presidentes y Vicepresidentes.”[[2]](#footnote-2)

El funcionamiento del sistema se llevaba a cabo de la siguiente manera:

Desde el organismo territorial más elemental como lo era en esa época la parroquia, se iniciaba el ejercicio electoral, convocando a todos los habitantes de la misma a votar por un candidato. Los requisitos que debía tener un ciudadano para concurrir al voto eran:

* Ser colombiano.
* Ser casado o mayor de 21 años.
* Saber leer y escribir
* Ser dueño de una propiedad raíz, cuyo valor alcanzará $100.oo

El candidato también debía reunir características para ejercer la designación, tales como:

* Ser sufragante parroquial
* Saber leer y escribir
* Ser mayor de 25 años
* Ser dueño de una propiedad raíz, o gozar de un empleo que proporcione una renta anual de $300.

Una vez se elegía al candidato de cada parroquia, se daba inicio a la segunda fase del proceso electoral, consistía en una especie de lucha con los demás candidatos parroquiales para salir como un único candidato del cantón. Terminada esta fase, el candidato electo representaba al cantón ante la Asamblea Provincial. El sufragio era público, dado a que la manifestación se realizaba en voz alta, así se conocían las inclinaciones políticas de cada ciudadano, lo cual conllevo en la época a varios episodios de violencia.

Luego de unos años, llega la Constitución de 1830, cuyo motivo principal consistió en la creación de una Constitución más sólida que conllevara a la fortificación de La Gran Colombia. La Carta de 1830, mantuvo la división territorial del país, en departamentos, provincias, cantores, parroquias, se fortaleció en su administración a través de los Consejos Municipales y las Cámaras de Distrito.[[3]](#footnote-3)

Los requisitos de los sufragantes se mantuvieron iguales, aunque las prohibiciones electorales se extendieron a los sirvientes, lo cual genero un voto más selectivo en protección de una clase favorecida. Con esta reforma, se controvierte el ejercicio electoral, porque si bien se quería acercar las elecciones hasta el pueblo, se limita la cantidad de votantes por no cumplir con los requisitos.

En la época de 1832, y una vez disuelta la Gran Colombia, era necesario que el país buscara su propia Constitución. Esta fue expedida para el Estado de la Nueva Granada por los delegados de las provincias reunidos en convención y sancionada el 1º de Marzo de 1832. Esta Constitución estableció el periodo Constitucional de 4 años, las Asambleas Electorales elegían al Presidente, Vice-Presidente, Senadores, Representantes y Diputados.

El sufragio por su parte, seguía presentando las mismas características de ser en voz alta y ante un consejo electoral, que tenía como característica principal velar por la efectividad de las elecciones.

Años más tarde es sancionada la Constitución de 1853, la cual constaba tan solo de 64 artículos, siendo esta la más sucinta de las anteriores que se había expedido a partir de la época de la Independencia, su inicio estaba encuadrada así “EN NOMBRE DE DIOS LEGISLADOR DEL UNIVERSO Y POR LA AUTORIDAD DEL PUEBLO”[[4]](#footnote-4). “A partir de del momento se llamara el Estado Colombiano de la siguiente Manera: “Confederación Granadina”[[5]](#footnote-5), otro de los cambios notables de la Carta del 53 fue la reforma electoral, mediante la cual se concedió el Voto Universal y Directo a todos los habitantes del territorio[[6]](#footnote-6).

Los ocho Estados que conformaban la “Confederación Granadina”, acuerdan la creación de una nueva Constitución, dado a la guerra civil que se desato en la época. Se creó con la excepción que lo que no se contemplara quedaría a disposición de los Estados. Bajo este régimen, se acabaron las elecciones universales, se retrocede a la constitución de 1821, dejando como requisito la edad de 21 años para los sufragantes.

Dado a la guerra civil del 60, el equilibrio Constitucional se ve debilitado, conllevando esto a la necesidad de una nueva convocatoria de reformas constitucionales, las cuales se llevaron a cabo en el año de 1862 para dar así una nueva organización a lo que se le conoció como Estados Unidos de Colombia.

En el Municipio de Rionegro – Antioquia, 70 delegatarios se reúnen para tomar decisiones en cuanto a la Nueva Constitución. Buscaban con las decisiones tomadas por ellos, debilitar al Ejecutivo, dar ciertas facultades a los Estados miembros de la Unión, como la libertad en temas militares. Se estableció la representación según el censo en las Cámaras y número en el Senado (3 Representantes por provincia).

El sistema electoral también sufre reformas en esta época. El Presidente resultaba elegido por la mayoría de la votación de los Estados, los Senadores y Representantes también serán elegidos por los electores, pero adicional a esto los Representantes que correspondían a los territorios más poblados poseían todos loes derechos (vos y voto), los otros asuntos en materia electoral seguían igual.[[7]](#footnote-7)

En concordancia con lo anterior, se convocó un Consejo Delegatorio en la capital de la Unión, esto para deliberar los términos de la Nueva Constitución. Este Consejo estaba compuesto por ocho (8) Representantes de los Estados, (1) un conservador y, (1) un liberal de cada Estado, la deliberación se llevó a cabo hasta el 05 de Agosto de 1886 cuando se da a conocer el fondo de su contenido, el cual manifestaba:

1. Sistema Unitario: Cuya soberanía residiría exclusivamente en la Nación.
2. Los Departamentos entrarán a sustituir los Estados.
3. Se conservó la figura del Ejecutivo a cargo del Presidente y del Vice – Presidente.
4. El Legislativo estaba compuesto por 2 cámaras: Senado, compuesto por 3 representantes por departamento y la Cámara, estaba compuesto por representantes según el número de habitantes.

En sistema electoral, se acabó con el sufragio universal, solo podían votar personas con las siguientes características:

* Hombre
* 21 años de edad
* Que tenga cualquier método de subsistencia.

Hasta estos requisitos podían elegir Concejales y Diputados

Para Elegir Senadores y Representantes y elegir sufragantes para designar Presidente, se adicionaron dos características más:

* Saber leer y escribir.
* Renta anual de $500 pesos.

Haciendo este breve recuento de la evolución de nuestra Constitución, podemos notar que hasta la época de 1886, no existió dentro de las reformas que se hicieron a la Carta ninguna que contemplara el Voto Obligatorio en el país, de esto se puede deducir que dado a la época no se consideraba de gran necesidad, debido a los ideales que imperaban, o simplemente que los sufragantes obedecían al cumplimiento eficiente del civismo y a las funciones sociales del Estado.

**Reformas a la Constitución de 1886 – Voto.**

En 1910, se convocó a una Asamblea Nacional, en la cual se marcó los temas objeto de la reforma Constitucional, entre ellos el sistema electoral, que quedaría para la época así:

(…) Las elecciones nuevamente se harán por el voto directo de los ciudadanos que supieren leer y escribir o tuvieren una renta anual de $300, o propiedad raíz de $1.000 pesos, se elimina el requisito de la edad.

En 1936, sube al poder el doctor Alfonso López Pumarejo, quien da un desvío a la administración nacional y busca la inclusión de una serie de reformas a la Constitución, de contenido social, las cuales establecían: Voto universal para los hombres, manifestación de la voluntad sin distingos económicos e intelectuales.

Llegaría luego la reforma de 1945, que en materia electoral no fue tan extensa, pero da una gran inclusión a la mujer, concediéndole la ciudadanía pero aún no se le concede del todo el voto, se acerca más a la mujer, en el sentido que confiere al pueblo en general la posibilidad de elegir a quienes representarían sus intereses.

La participación femenina en el sistema electoral, llega en 1957, a través del Decreto Legislativo Nro. 0247 de 1957, artículo 1º, en adelante la mujer tenía que tomar parte en todas las elecciones que dentro del territorio se realizaban.

El Acto Legislativo de 1975, en su artículo 1, estableció “El artículo 14 de la Constitución Nacional quedara así: Son ciudadanos colombianos los mayores de 18 años”.

Con el anterior Acto Legislativo, se dan por cerradas las reformas electorales que afectaban el sufragio en Colombia.

La Constitución de 1991 reconoce a Colombia como un Estado Social de Derecho, organizado como Republica unitaria descentralizada, de manera que sus entidades territoriales deben ser autónomas.

No es del caso entrar a explicar en detalle las instituciones que estableció la Constitución de 1991 que, sin duda, constituyó una revolución política. Desde la papeleta, que sirvió para su convocatoria (Decreto Legislativo 927 de 1990), se planteó el tema de una democracia participativa. Y así quedaron consagradas en un título especial (Título IV: De la participación democrática y de los partidos políticos) un número de formas de participación democrática que prácticamente cubren todo el espectro de opciones.[[8]](#footnote-8)

La reforma política contenida en la Constitución de 1991 incluye también a los partidos, a los movimientos políticos y a las agrupaciones o “grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos”. Se refiere también al uso de los medios masivos de comunicación y al acceso que tendrán los candidatos a esos medios, y considera específicamente el estatuto de la oposición, así como la representación de los partidos y movimientos minoritarios en las mesas directivas de los cuerpos colegiados.

Aparte de ello se introdujo una reforma al Congreso, tanto en el número de sus miembros como en el sistema electoral para la elección de Senado, al introducir la circunscripción nacional que favorecía a las minorías en una forma mucho más generosa que la planteada por la administración Barco. Además, se introdujo el Consejo Nacional Electoral, para asegurar la transparencia democrática, y el sistema más ambicioso de descentralización, tanto fiscal como política, al consolidar la elección popular de alcaldes y de gobernadores. [[9]](#footnote-9)

Adicionalmente, se introdujo la vicepresidencia de la República y el sistema de dos vueltas para la elección presidencial; se confirmó el nuevo sistema de votación por la vía del tarjetón, elaborado por la autoridad electoral y distribuido por esa misma autoridad en las mesas de votación, y se incorporó un sistema parcial de financiación estatal de los partidos políticos y de las campañas electorales. [[10]](#footnote-10)

**La propuesta de referéndum del Presidente Pastrana**

En su alocución del 30 de marzo de 2000, el presidente Andrés Pastrana anunció un referéndum constitucional dirigido a introducir reformas significativas en el sistema político colombiano. Por primera vez se proponía usar un mecanismo de participación de la Constitución de 1991 para que el pueblo colombiano se pronunciara en una materia de tanta importancia. El diagnóstico del gobierno, resultado del escándalo de corrupción propiciado por la Mesa Directiva del Senado, era contundente:

(…)” Estamos en presencia de un sistema político articulado sobre pequeños intereses y por el clientelismo. La relación entre el ciudadano y las instituciones se haya debilitada en grado superlativo, carcomida por el cáncer de la desconfianza […] Se trata de realizar una profunda cirugía a un tejido institucional que no funciona regularmente a través de un esquema de pesos y contrapesos dando lugar a una corrupción sistémica y a una disfuncionalidad manifiesta al interior del Estado”.[[11]](#footnote-11)

El proyecto convocaba un referéndum para el 16 de julio de 2000 y al efecto se proponía la aprobación de un Proyecto de Ley (261 de 2000 Cámara) que contenía 17 preguntas específicas que precedían 17 reformas a la Constitución Nacional, en lo que sería el texto del referéndum que se sometería a la decisión popular.

Esta propuesta gubernamental desató una formidable crisis política que bloqueó pronto la iniciativa de referéndum y que condujo a dos situaciones: la recolección de firmas para la promoción de uno de iniciativa popular y, simultáneamente, la presentación de un proyecto de reforma política en el Congreso, por parte de un grupo de senadores, integrado, entre otros, por Juan Martín Caicedo y Rodrigo Rivera. Tanto el proyecto gubernamental como el del Congreso y la iniciativa popular fracasaron en distintos momentos y por diferentes razones.

El temario de la propuesta gubernamental de referéndum consideraba:[[12]](#footnote-12)

1. Reducción, integración y elección del Congreso de la República.
2. Supresión de las asambleas departamentales y creación de consejos departamentales.
3. Reducción, integración y elección de los concejos municipales y distritales.
4. Remuneración de concejales y miembros de juntas administradoras locales.
5. Inhabilidad por corrupción y por pérdida de investidura.
6. Fortalecimiento de la pérdida de la investidura.
7. Tribunal de ética pública.
8. Régimen de partidos y movimientos políticos.
9. Financiación de campañas.
10. Efectividad del voto en blanco.
11. **Voto obligatorio por una vez.**
12. Cumplimiento de periodos.
13. Funcionamiento del Congreso.
14. Eliminación de suplencias.
15. Eliminación de privilegios salariales y prestacionales.
16. Órganos de control (procurador general y contralor general).
17. Convocatoria a elecciones y régimen de transición.

Al considerar que la soberanía reside en la totalidad del pueblo y que el poder de los gobernantes emana de la reunión de todos los ciudadanos, se hace evidente que el voto permite la existencia de la democracia representativa, ya que sin votos no hay representación, no hay mandato, no hay democracia viva. He ahí, la importancia del voto en la participación de los ciudadanos en la formación y ejercicio del poder político y su control.

Teniendo en cuenta esto, es necesario plantear la necesidad de establecer el voto obligatorio en Colombia. Esto dado que a lo largo de la historia electoral del país los gobernantes han sido elegidos en realidad por minorías y no por las mayorías establecidos según los principios democráticos, lo cual quebranta la legitimidad y gobernabilidad de los mandatarios e instituciones.

Debido a las dificultades a las que se ha enfrentado el sistema electoral colombiano, se han realizado diferentes reformas para facilitar e incentivar la participación ciudadana en los diferentes comicios. Es por esto que en 1994 se realizó una reforma que permitió la inscripción automática, conservando el voto voluntario.

Sin embargo el abstencionismo mantuvo sus niveles lo cual llevó a la creación de incentivos al sufragio entre los que se pueden destacar: la reducción de 10% en el costo de certificado de antecedentes personales, cédula de identidad y pasaporte; reducción en el mismo porcentaje en las matrículas de las universidades públicas; disminución en un mes de servicio militar; un día de descanso remunerado para todos los trabajadores; entre otros.

A pesar de los esfuerzos realizados para incentivar la participación ciudadana, los niveles de abstención se han mantenido en un nivel promedio de 54%, lo cual lleva a preguntarse si es necesario implementar el voto obligatorio en Colombia, tesis que se ha planteado incluso desde la Asamblea Constituyente de 1991.

Medida que ha sido acogida en diferentes países y que se plantea como necesaria al momento de enfrentar el clientelismo político y el abstencionismo, condiciones que han permitido la penetración de la ilegalidad en los procesos electorales.

1. **UNA MEDIDA CONTRA LA ABSTENCIÓN**

Esta reforma, no constituye, en forma alguna, una innovación en el derecho público, toda vez que es norma o práctica, en varios países de nuestro hemisferio, los cuales comparamos de manera general en este Proyecto y que su aplicación ha generado resultados benéficos para el desarrollo político. (Ver cuadro)[[13]](#footnote-13)

El problema jurídico del voto y su posible obligatoriedad, gira en torno a la participación o abstención del ciudadano en las elecciones, es indudable que la concurrencia de los sufragantes a las urnas es escasa, esto si bien lo evaluamos más detalladamente podríamos aseverar que es un gran síntoma en la crisis de la democracia.

Los resultados de las últimas elecciones en Colombia, nos demuestra de forma alarmante, la poca concurrencia de los ciudadanos a hora de ejercer su derecho al voto, es por esto que un gran remedio para superar los síntomas de gravedad que atacan nuestra democracia, figura en convertir al voto en obligatorio, transformándolo de derecho en deber.[[14]](#footnote-14)

Dentro del grupo de lo que se ha denominado de la "abstención" o aquella en que incurra el ciudadano participante y activo en la vida económica y social, pero que rechaza la actividad electoral, se distinguen dos actitudes causales básicas: la apatía y la protesta:. El ciudadano apático no vota, porque, como suele responder a los encuestadores " la política no le interesa", ya sea en razón de " la falta de programas del gobierno de turno", o por considerar que el voto no tiene eficacia alguna como para producir variantes o cambios en la marcha política del Estado.

Ninguna iniciativa legal que se oriente a una reforma del sistema de elecciones, constituye un medio directo que subsane las fallas estructurales del sistema político. El voto obligatorio, sin embargo, puede ser un medio indirecto que en una perspectiva a largo plazo favorezca la capacidad del ciudadano para decidir en el proceso político.

Los gobiernos son inestables, porque el consenso mayoritario, con el cual no cuentan, es el presupuesto operativo de su poder; son gobiernos débiles porque despojados del apoyo de una expresión de la voluntad popular, carecen de medios en sentido cualitativo para imponer su gestión. Por otra parte, la política, entendida como una actividad que proyecta a largo plazo realizaciones colectivas por medio del poder público, resulta imposible dentro del pasamiento democrático, si la voluntad popular, como mayoría del electorado, no se expresa. Esta falla quita legitimidad y distorsiona la política, pero cualquiera nueva elección, todo programa del Estado o realización en marcha, se encuentra en permanente sobresalto.[[15]](#footnote-15)

1. **ABSTENCIONISMO EN COLOMBIA**

Haciendo un breve recuento de lo más cercano de las elecciones de nuestro país y que para nadie es un secreto el alto índice de abstencionismo en las pasadas elecciones presidenciales en Colombia, se evidencia que con respecto a las elecciones del pasado 25 de mayo (primera vuelta presidencial), el abstencionismo en Colombia fue del 59.93%, siendo esta cifra una de las más altas en los últimos 20 años. Para la Segunda vuelta de las elecciones presidenciales la cifra de abstencionismo fue del 52.11%, se rescata de 2.4 millones de colombianos más fueron a las urnas a cumplir con su derecho al voto. En concordancia con la información que publica la Registraduria Nacional[[16]](#footnote-16), de un total de 32.975.158, tan solo 15.794.940 evidentemente sufragaron, lo que demostró que el abstencionismo es notoriamente alto en la segunda vuelta, en departamentos como:

San Andrés 76%

Vaupés, 70%

Vichada, 68%

La Guajira, 67%

Choco, 65%

Guainía, 64%

Bolívar, 63%

Amazonas, 60%

La historia de nuestro país en materia de elecciones populares señala, desde 1958, que la tendencia del abstencionismo en Colombia ha sido superior al 50%, es por ello que se hace urgente y necesario combatir este porcentaje que tanto debilita el proceso de participación democrática y el derecho de elegir y ser elegido, para hacer un acercamiento con este índice de abstencionismo, demostramos lo siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **PRESIDENTE ELECTO** | **TOTAL SUFRAGANTES** | **% ABSTENCION** |
| 1958 | Alberto Lleras Camargo | 3.108.567 | 42.06% |
| 1962 | Guillermo León Valencia | 2.634.840 | 51.25% |
| 1966 | Carlos Lleras Restrepo | 2.649.258 | 59.93% |
| 1970 | Misael Pastrana | 4.036.458 | 47.47% |
| 1974 | Alfonso Lopez | 5.218.855 | 41.53% |
| 1978 | Julio Cesar Turbay | 5.075.719 | 59.66 |
| 1982 | Belisario Betancur | 6.834.250 | 50.24% |
| 1986 | Virgilio Barco | 7.228.676 | 53.70% |
| 1990 | Cesar Gaviria | 6.047.576 | 57.52% |
| 1994 | Ernesto Samper | 7.427.742 | 56.68% |
| 1998 | Andrés Pastrana | 12.310.107 | 40.98% |
| 2002 | Álvaro Uribe | 11.249.734 | 40.98% |
| 2006 | Álvaro Uribe | 12.041.737 | 54.95% |
| 2010 | Juan Manuel Santos | 13.296.924 | 55.66% |
| 2014 | Juan Manuel Santos | 15.794.940 | 52.11% |

Una de las debilidades más profundas de la democracia colombiana, a lo largo de la historia ha sido el abstencionismo electoral, frente a lo cual cabe señalar que en los últimos 56 años, en los cuales se han celebrado 15 elecciones presidenciales, el porcentaje promedio aproximado de participación electoral tan solo alcanza el 46%, es decir que la mitad o más de los ciudadanos habilitados para votar se han abstenido de asistir a las urnas, independiente de los candidatos o coyuntura en la cual se desarrollaba los sufragios.

Lo anterior lo corroboran las estadísticas presentadas por la Registraduría, cuyas cifras a 2010 señalan que con un censo electoral de 29.882.147 de ciudadanos aptos para votar, un presidente es elegido como máximo con el 42% del total del censo. Situación que se mantuvo en las pasadas elecciones pues a pesar de que el censo electoral aumentó y al 15 de abril de 2014 era de 32.975.158 de ciudadanos habilitados para votar, a las urnas solo asistieron 15.794.940 ciudadanos, dejando un presidente electo con apenas 7.816.986 votos, lo cual representa tan solo el 24% del censo electoral.



*Tabla 1. Así participan los colombianos en las elecciones Presidenciales. Registrauria Nacional del Estado Civil*

Las cifras muestran que a pasar del crecimiento del censo electoral, el cual aumentó en un promedio de 1.893.699 (7.69%) de ciudadanos por cada elección presidencial, la participación política se ha mantenido en aproximadamente 56,52%. Lo anterior se constata con que solamente en las elecciones de 1958, 1970, 1974 y 1998 la participación ciudadana superó el 50%, siendo las elecciones de 1974 aquellas con el nivel más alto de intervención política, 58,47%. Por otra parte las elecciones de 1994, en las que se eligió como presidente a Ernesto Samper Pizano, denotan la participación más baja, en donde el 66,05% de los ciudadanos aptos para votar se abstuvieron de comparecer a las urnas.

Aunque después de dichos comicios no se ha repetido un fenómeno similar, la línea de participación se ha mantenido, con porcentajes que oscilan entre el 40 y el 50% de participación. Lo anterior señala que a pesar del aumento del censo de sufragantes, y de las nuevas herramientas de las que se ha revestido la democracia, los resultados de los últimos 56 años denotan que aún sigue existiendo una falencia en el proceso electoral colombiano. Esto ha llevado a plantear que los potenciales electores colombianos se dividen en tres grupos, de los cuales el abstencionista es el de mayor porcentaje:

1. País político, 30% de población electoral que tiene una cultura electoral definida.

2. Abstencionismo coyuntural, 20% conformado por población electoral que eventualmente sale a votar.

3. Abstencionismo estructural, 50% de ciudadanos que no están interesados en la política.

Teniendo en cuenta las alarmantes cifras y el hecho de que el nivel normal de abstencionismo en el país es del 54%, lo cual, de acuerdo con Alejo Vargas (profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional) es un factor importante en la actividad electoral colombiana ya que de allí se deriva la legitimidad de las autoridades electas. Es por esto que es necesario preguntarse cómo bajar esa cifra que, a pesar de los esfuerzos sigue siendo bastante elevada.

Frente a esto el jefe de la Misión de Veeduría Electoral de la Organización de Estados Americanos, José Antonio Viera-Gallo, señaló la necesidad de estudiar si los incentivos para el voto han sido suficientemente eficaces. Y es que este fenómeno se presenta en todos los comicios que se llevan a cabo en el país, pues en las recientes elecciones legislativas solo 14.310.367 de los 34.835.856 de colombianos convocados a la urna participaron, generando una abstención de 56,42% para el Senado de la República, y del 56,43 para la Cámara de Representantes. Frente a este fenómeno en las elecciones legislativas el Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario, observó el comportamiento del potencial de votantes de cada departamento del país, como votaron y los niveles de abstención de cada uno de estos.

La siguiente gráfica muestra esta distribución, donde el 100% equivale a la cantidad de personas inscritas en el censo electoral del departamento y las barras como se distribuyó el total de electores, organizando por departamentos, de izquierda a derecha, los que más candidatos emitieron hasta los que menos.[[17]](#footnote-17)

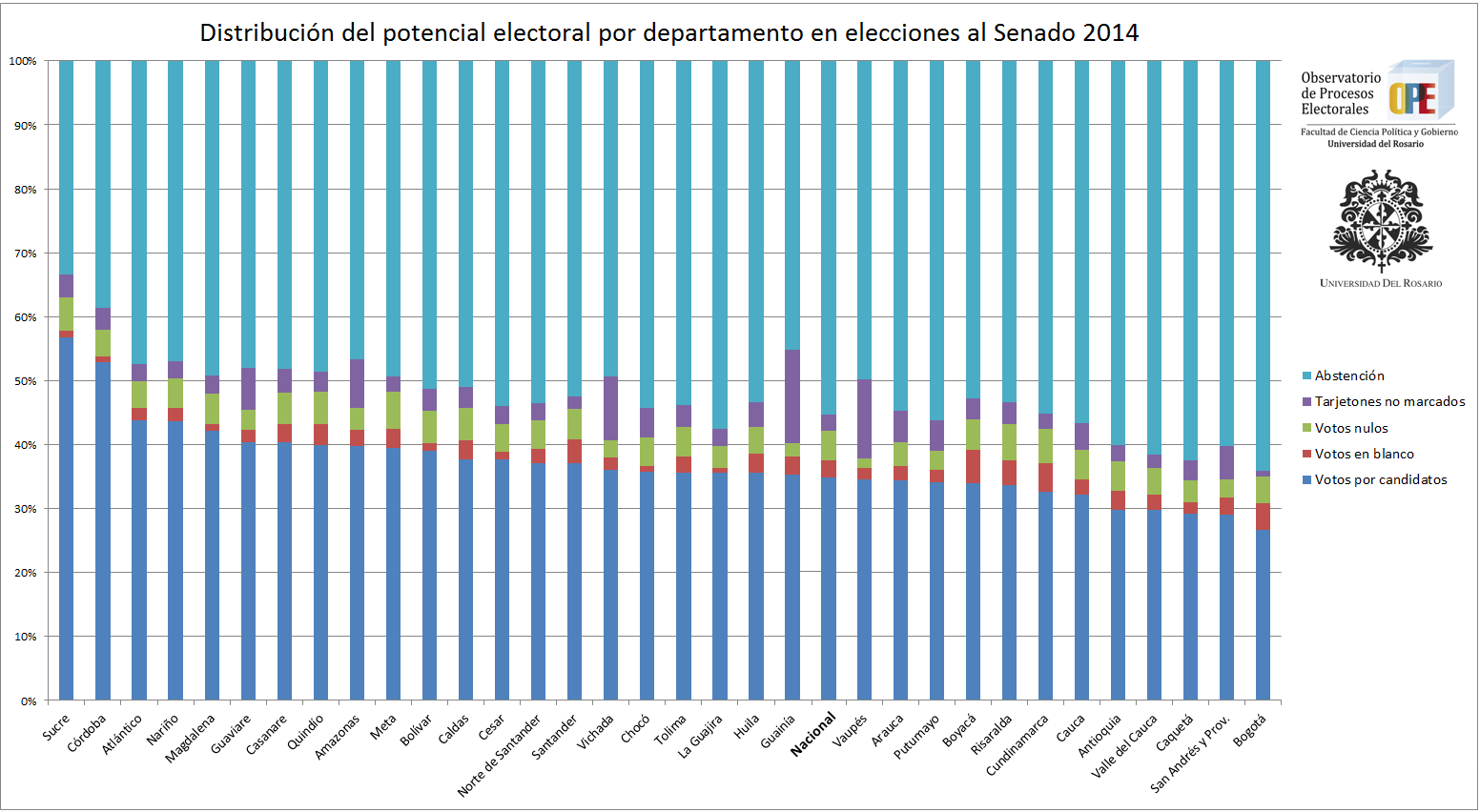


Tabla 2. *Distribución del potencial electoral por departamento en elecciones al Senado 2014.*Observatorio de Procesos Electorales.

Es por esto que se puede decir que los abstencionistas constituyen la primera fuerza política del país, abriéndole la puerta a la ilegitimidad del proceso democrático en cada voto que dejan de emitir, ya sea a favor o en contra de alguien o algo. Frente a esto, el exsenador por el Partido Socialista Francés y actual ministro de relaciones exteriores, Laurent Fabius, plantea que la *abstención masiva es una abdicación de la soberanía, y por esto cuestiona el fundamento mismo de la democracia ya que reduce la legitimidad de los elegidos y sus decisiones.*

Finalmente es necesario señalar que en los países en los que se estipuló la obligatoriedad del voto se presentó un incremento sustancial de la participación electoral, que a pesar de no ser constante aumento los niveles de participación de forma constante evitando que alcancen los niveles iniciales. Es por esto que es necesario analizar la obligatoriedad del voto en otros países del continente.

1. **OBLIGATORIEDAD DEL VOTO EN OTROS PAISES**

En los países Latinoamericanos, el voto obligatorio se ha convertido en un componente importante para la consolidación de la democracia. Es por esto que dicho mecanismo se ha institucionalizado en Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Costa Rica, Honduras, México, Australia, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Egipto, con variación en el funcionamiento del sistema frente a la obligatoriedad, incentivos y sanciones, pero que en general ha logrado tasas de participación entre 70 y 90%, Colombia y Nicaragua aún no han logrado implementar dicho mecanismo. A continuación una gráfica que sustenta lo sustenta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAÍS | VOTO OBLIGATORIO | DENOMINACIÓN JURÍDICA | SANCIÓN |
| ARGENTINA | Sí. (1912). Después de los 70 años se exonera de la obligación. | Deber de votar" (cargo público) (Art. 12 Código Electoral Nacional). | Multa de 500 Pesos. |
| BOLIVIA | Sí (1929). | Voto obligatorio" (Art. 219, Constitución). | Multa fijada por la Corte Nacional Electoral. |
| BRASIL | Sí (1932). | Voto obligatorio porque constituye un deber irrenunciable de la ciudadanía. (Art.14,1 Constitución, Art.3a, Ley Electoral) | Multa de 3 a 10% sobre el salario mínimo. |
| COLOMBIA | No. | Es deber participar en la vida política, cívica y comunitaria del país"(Art. 95, numeral 5, Constitución Política.)  Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, el voto, “El voto es un derecho y un deber ciudadano" (Art. 258 c). |  |
| COSTA RICA | Sí (1844). | El sufragio es una función cívica primordial y obligatoria"(Art. 93 Constitución). | No Hay. |
| CHILE | Sí. A los ciudadanos inscritos. | En las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario y secreto. Para los ciudadanos será, además obligatorio (Art. 15 de la Constitución). | Multa de media a 3 unidades tributarias mensuales. |
| ECUADOR | Sí. **Facultativo** para analfabetos **Inscripción automática**, para mayores de 65 años. | El voto es obligatorio para los que sepan leer y escribir y facultativo para los analfabetos" (Art. 33 Const.) El sufragio es derecho y deber de los ciudadanos ecuatorianos. Por medio de él se hace efectiva la participación en la vida del Estado. | Multa de 2 a 25% del salario mínimo vital. |
| EL SALVADOR | Sí (1950). | Los derechos políticos del ciudadano son: Ejercer el sufragio" (Art. 73 1° Constitución, el sufragio es un derecho y un deber de los ciudadanos, su ejercicio es indelegable e irrenunciable". (Art.3,Código Electoral) | No Hay. |
| GUATEMALA | Sí (1965). | Son derechos y deberes de los ciudadanos "Inscribirse en el Registro de Ciudadanos, elegir y ser electo". (Art. 136, a) y b), Constitución y Art. 3 b),c) y d) de la Ley Electoral e los Partidos Políticos. | No Hay. |
| HONDURAS | Sí. Inscripción obligatoria. | Son deberes del ciudadano, ejercer el Sufragio" Art. 40, numeral 3 Constitucional.) El sufragio es un derecho y una función pública. El voto es universal, obligatorio". (Art. 44, Constitución).  Su ejercicio (del sufragio) es obligatorio" (Art. 6, Ley Electoral) | Multa De 20 Lempiras. |
| MÉXICO | Sí. Inscripción Obligatoria. | Son prerrogativas del ciudadano, “ votar en las elecciones populares".(Art. 35, I Constitución). “Son obligaciones del ciudadano votar en las elecciones populares en el distrito que le corresponda" (Art. 36 III, Constitucional.) Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación del ciudadano" (Art. 4, Código Fed. de Inst. y Procedimientos Electorales). | No Hay. |
| NICARAGUA | No. | Los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas, (Art. 51, Constitución). “Para ejercer el derecho a sufragio los ciudadanos deberán inscribirse en los registros electorales" (Art. 31, 27 Ley Electoral). |  |
| PANAMÁ | Sí. (1928) Inscripción Obligatoria (deber). | “El sufragio es un derecho y un deber de todos los ciudadanos" (Art. 129) “Todos los ciudadanos que sean electores deberán votar en las elecciones" (Art. 6, Código Electoral) | No Hay. |
| PARAGUAY | Sí (1940). | “El sufragio es derecho, deber y función pública del elector, su ejercicio será obligatorio"(Art, 111 Const.) “El sufragio es un derecho y un deber político" (Art.1, Código Electoral) | No Hay. |
| PERÚ | Sí (1931). Obligatorio hasta los 70 años. | “El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años" (Art.65 Constitución)(Art. 5 D.L. 14250) “Es deber ciudadano sufragar en comicios políticos y municipales" (Art. 75, Constitución) | Sin información. |
| REPÚBLICA DOMINICANA | Sí (1963). | “Todo ciudadano dominicano tiene el deber de votar" (Art. 9, d, Constitucional.) “Es obligatorio para todos los ciudadanos ejercer el sufragio” (Art. 88 Ley Electoral) | Sin Información. |
| URUGUAY | Sí. | “El sufragio se ejercerá en la forma que determine la ley pero sobre las bases siguientes: 1°. Inscripción obligatoria en Registro Cívico. 2°. Voto Secreto y obligatorio” | Sin Información |
| VENEZUELA | Sí (1958) Inscripción obligatoria (Art. 7 Ley Orgánica del Sufragio). | “El voto es un derecho y una función pública. Su ejercicio será obligatorio" (Art. 110, Constitución) | Multa de 10 a 25 días salario mínimo o arresto proporcional. |

1. **PEDAGOGIA Y SANCIONES**

Si bien, como se ha señalado anteriormente, es necesario implementar el voto obligatorio y mejorar los incentivos y sanciones relacionadas con esta medida, es de igual importancia para el buen funcionamiento del sistema que la participación ciudadana sea parte de la educación.

Es por esto que cabe resaltar la necesidad de implementar en los espacios escolares espacios de comunicación y participación que forme a los estudiantes inculcándoles los principios y valores de la democracia, vista como fruto de un proceso de aprendizaje.

Es necesario impartir una educación cívica que enaltezca la institucionalidad política, una pedagogía que combine la ética y la política, impulsando la participación de movimientos sociales, rompiendo con el elitismo político, para lo cual ya cursa en el congreso una ley que reglamentara esta materia, y que garantizara que la formación del educando sea integral.

La instauración de una cátedra de civismo, permitirá crear más patriotismo en los ciudadanos y que se creen las condiciones propicias para el funcionamiento de la democracia participativa, despertando desde los inicios el interés hacia el manejo de lo público, formando ciudadanos comprometidos con los valores de la democracia, la igualdad social, solidaridad y ampliando los niveles de participación eliminando así la exclusión y creando un país de todos para todos los colombianos.

En síntesis, el voto obligatorio demanda la institucionalización de la educación cívica electoral para que los ciudadanos participen de manera responsable y activa en la toma de decisiones del país. Esto permitirá que los colombianos tomen control de sus decisiones y participen de manera activa en la transformación del Estado.

Finalmente, en lo concerniente a sanciones, beneficios y exenciones para los ciudadanos consideramos que esta reglamentación debe de quedar expresa en una Ley y no en el Acto Legislativo. La ley 403 de 1997 define y reglamenta esta materia y justamente cursa un Proyecto de Ley (033 de 2014) en la Comisión Primera de la Cámara que recoge propuestas que se han plasmado en los actos legislativos asunto de nuestro estudió.

1. **EL COSTO DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES**

Todo lo concerniente a la financiación de las campañas electorales es un tema vehemente en la actualidad del país y de los últimos comicios electorales, debido a que se entrona en el génesis de la democracia y el funcionamiento de la misma. En el inicio de una campaña electoral no se puede desconocer la figura del dinero en todo lo que conlleva la política hasta que se finaliza el proceso. Se requiere de manera urgente regular la presencia inevitable del dinero y evitar que se convierta en un factor perturbador del sistema o, como se suele escuchar impedir que se convierta en un “factor de perversión de poder” que en lugar de coadyuvar a fortalecer la democracia, venga a trastornar el sentido de la misma, gracias a la enorme capacidad corruptora que, por el manejo que de él se hace, ha adquirido en nuestros tiempos.

**FINANCIACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES.**

La financiación de las campañas políticas en Colombia es un aspecto bastante árido en nuestro país, han sido muchos escándalos los que se han originado alrededor de este tema, ya que se piensa siempre cuando se habla de financiación de campañas políticas a las infiltraciones de dineros ilícitos. El Sistema Jurídico de Colombia, busca garantizar que el Estado disponga los recursos públicos suficientes, tanto para el funcionamiento de las organizaciones políticas, como para las campañas que éstas desplieguen en el marco de las contiendas electorales. También es claro que el Estado concurre en la financiación de la política; esto quiere decir, que se establece un sistema de financiamiento mixto, en el cual, el Estado y los particulares contribuyen en el financiamiento de la organización política y de las campañas electorales que esta efectúe.

La Constitución Política de Colombia manifiesta la competencia del Estado para establecer límites tanto a los gastos que las organizaciones realizan en desarrollo de sus campañas, como a los aportes y contribuciones que los particulares destinen para tal fin. Previendo que en aquellos casos en los que sea debidamente comprobada la omisión de los topes y montos máximos, los candidatos que hayan resultado electos serán sancionados con la pérdida de su investidura o cargo. [[18]](#footnote-18)

El incumplimiento de los topes máximos de gastos de campañas, es sancionado con pérdida de la investidura o el cargo, exclusión del financiamiento por vía de reposición de votos, y multas[[19]](#footnote-19). En efecto, la Ley 130 de 1994, dispone que *“…ningún candidato a cargo de elección popular podrá invertir en la respectiva campaña suma que sobrepase la que fije el Consejo Nacional Electoral, bien sea de si propio peculio, del de su familia o de contribuciones de particulares*”[[20]](#footnote-20), es deber del Consejo Nacional Electoral fijar esta suma, lo cual debe hacer con una antelación mínima de seis (6) meses al día en que se vaya a efectuar la contienda electoral, para lo cual deberá tener en cuenta el costo real de las campañas, el censo electoral de las circunscripciones y la apropiación que el Estado haga para reponer los gastos que en desarrollo de estas se incurran.[[21]](#footnote-21)

 Para tal efecto de la Financiación y el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos la actual legislación Colombiana ha regulado de manera precisa esta materia en cuanto a las fuentes de financiación para el funcionamiento y actividades de los mismos.[[22]](#footnote-22)

En desarrollo del precepto Constitucional contenido en el artículo 109, la Ley 1475 de 2011 en su artículo 17, el Fondo Nacional de Financiación Política, determino la forma de distribuir los dineros para financiar el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos.

Para tal efecto el legislador tuvo en cuenta los criterios de igualdad y representatividad según el número de votos o curules obtenidas en determinadas corporaciones públicas de elección popular, como también fijo la destinación de los respectivos recursos en el cumplimiento de los fines, logro de propósitos y en libre destinación e inversión, con la obligación de debatir y aprobar democráticamente los respectivos presupuestos al interior de cada partido o movimiento.

De acuerdo con la norma citada, la forma de distribución de los dineros es la siguiente:

a) Una suma básica fija equivalente al 10% será distribuida por partes iguales entre todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

b) El 15% se distribuirá en partes iguales entre los partidos o movimientos políticos que hayan obtenido el 3% o más del total de votos emitidos válidamente en el territorio nacional en la última elección de Senado de la Republica o de Cámara de Representantes.

c) El 40% se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o movimientos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección de Congreso.

d) El 15% se distribuirá, por partes iguales entre todos los partidos o movimientos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección.

e) El 10% se distribuirá, en partes iguales entre todos los partidos o movimientos políticos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección de Asambleas Departamentales.

f) El 5% se distribuirá, por partes iguales entre todos los partidos o movimientos políticos en proporción al número de mujeres elegidas en las corporaciones públicas.

g) El 5% se distribuirá, por partes iguales entre todos los partidos o movimientos políticos en proporción al número de jóvenes elegidos en las corporaciones públicas.

Para la presente vigencia, el Consejo Nacional Electoral mediante Resolución No. 109 de 2011 fijo la suma VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS( $ 26.317.399.346), para financiar los gastos de funcionamiento de 12 agrupaciones políticas con personería jurídica vigente.

2. **FINANCIACIÓN INDIRECTA**

**2.1. ESPACIOS GRATUITOS EN LA RADIO Y TELEVISIÓN.**

Se establece como principio general, la libertad de acceso de los partidos, movimientos y candidatos a los medios de comunicación.

En efecto, conforme al artículo 111 de la Constitución Política los partidos y movimientos políticos con personería jurídica tienen derecho a utilizar los medios de comunicación social del Estado en todo tiempo, conforme a la ley.

Las agrupaciones políticas acceden a la televisión y radio nacional en forma permanente para divulgación política, para que sus candidatos expongan sus tesis y programas en las elecciones presidenciales y para realizar propaganda electoral a favor de sus candidatos al Congreso de la Republica.

Al Consejo Nacional Electoral, previo concepto del Consejo Nacional de Televisión o el organismo que haga sus veces, le corresponde establecer el número y duración de los espacios y reglamentar la utilización de los mismos, en forma que se garantice el respeto a las instituciones y a la honra de las personas.

El consejo Nacional Electoral mediante Resoluciones 0020 y 0021 ambas de 2011, asigno el número y duración de los espacios institucionales de divulgación política de de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica en los servicios de Televisión del Estado y en la Radio Nacional, respectivamente.

**2.2**. **FINANCIACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES.**

Como se anotó anteriormente, el artículo 109 de la Constitución Política establece que las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y movimientos con personería jurídica o por grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas parcialmente por el Estado.

El sistema adoptado en Colombia es el de financiación mixta en el sentido de que proviene del Estado y de los particulares. La pública o estatal proviene a través de reposición parcial y posterior de gastos de campaña y con la posibilidad de entrega de anticipos en los términos y condiciones que establezca la ley.

**2.3 FINANCIACIÓN VIA REPOSICIÓN**

La financiación por vía de reposición tiene por objeto reponer en parte los gastos en que hayan incurrido los candidatos en desarrollo de sus campañas electorales.

Se efectuar a través de sumas variables por voto válido depositado por las listas o candidatos inscritos según el caso, y que hayan alcanzado el número de votos o umbral establecidos en la ley.

En relación con las campañas para Presidente de la Republica, la ley 996 de 2005 estableció que para tener derecho a la reposición de votos los candidatos deberán obtener en la elección al menos una votación igual o superior al cuatro por ciento (4%) de los votos válidos depositados. El candidato que no alcance dicho porcentaje no tendrá derecho a la reposición y deberá devolver el monto de la financiación estatal previa en su totalidad.

La entrega de la reposición se hace a través de los partidos o movimientos políticos, y la distribución se efectúa según lo dispuesto en sus estatutos. En caso de coaliciones partidistas se debe determinar previamente la forma de distribución so pena de perder la reposición.

Se destaca que la reposición de gastos únicamente cubre hasta lo efectivamente gastado, sin importar que la respectiva votación arroje una cantidad superior de dinero.

El valor de la reposición por  voto válido la actualiza el Consejo Nacional Electoral por un sistema de corrección monetaria el cual se aplica anualmente en función de las variaciones del índice de precios al consumidor.

**2.4 ANTICIPOS**

La Constitución prevé como mecanismo de financiación los anticipos y dejo a la ley la regulación de los requisitos y condiciones para acceder a los mismos, por su parte la Ley 1475 de 2011, reglamento que se podrá solicitar en forma justificada al Consejo Nacional Electoral has un (80%) de anticipo de la Financiación Estatal.[[23]](#footnote-23)

El valor del anticipo se deducirá de la financiación que se le otorga al partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos por concepto de reposición de gastos de campaña.

Los anticipos para las consultas y para campañas electorales no solo para la Presidencia de la Republica sino para cualquier otro cargo o corporación de elección popular.

El anticipo lo autoriza el Consejo Nacional Electoral directamente a los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos hasta un monto equivalente al 80% de la financiación estatal.

 El anticipo se autoriza teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal, y su cuantía se calcula a partir del valor de la financiación estatal recibida por el solicitante en la campaña anterior para el mismo cargo o corporación, en la respectiva circunscripción, actualizado con base en el índice de precios del consumidor.

Para el giro del anticipo previamente debe estar autorizada y aprobada la respectiva póliza o garantía, debiéndose girar hasta el monto garantizado dentro de los cinco días siguientes a la inscripción del candidato o lista o correspondiente.

El valor del anticipo se deduce de la financiación que le correspondiere al partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos por concepto de reposición de gastos de la campaña.

En caso de que no se obtuviere derecho a financiación estatal, el beneficiario del anticipo deberá devolverlo en su totalidad dentro de los tres meses siguientes a la declaratoria de la elección, a cuyo vencimiento se hará efectiva la correspondiente póliza o garantía.

Si no se obtuviere derecho a la financiación estatal, el beneficiario del anticipo deberá devolverlo dentro de los tres meses siguientes a la declaratoria de la elección, a cuyo vencimiento se hará efectiva la respectiva póliza o garantía.

**2.5 FINANCIACIÓN PRIVADA PARA CAMPAÑAS ELECTORALES**

La ley 1475 de 2011 faculta a los partidos, movimientos y candidatos para recibir ayudas o contribuciones económicas de personas naturales y jurídicas y a invertir en las mismas dineros de su propio peculio, del de su familia o de contribuciones de particulares sin exceder las sumas que para el efecto fija el Consejo Nacional Electoral seis meses antes de la elección.

Los criterios que tiene en cuenta el Consejo Electoral para fijar los topes máximos de inversión son el censo electoral, los costos de las campañas y el monto que destina el Estado para reponer parcialmente los gastos efectuados durante ellas.

El candidato que sobrepase los topes máximos de inversión no tendrá derecho a recibir los dineros provenientes de fondos estatales, sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar.

Otra fuente de financiación de las campañas son los créditos bancarios, para lo cual el Banco de las República les ordena abrir líneas especiales de crédito, garantizados preferencialmente con la pignoración del derecho resultante de la reposición de gastos.

En relación con las campañas a la Presidencia de la Republica, la ley 996 de 2005, estableció un monto máximo de las contribuciones o donaciones por parte de particulares, al señalar que el veinte por ciento (20%) del tope de los gastos de las campañas presidenciales podrá ser financiado por personas naturales; sin embargo, las campañas presidenciales no podrán recibir aportes o donaciones individuales de personas naturales sino hasta el dos por ciento (2%) del monto fijado como tope de la campaña.

En cuanto a los aportes de los candidatos y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil no podrán superar en conjunto el cuatro por ciento (4%) del monto fijado como tope por el Consejo Nacional Electoral.

Cabe destacar que la Corte Constitucional mediante sentencia C-1153 de 2005, declaro inexequible las contribuciones de personas jurídicas a las campañas presidenciales, sobre el particular, señalo la Corte:

*(..)” No obstante, la Corte encuentra que no se ajusta a la Constitución el que el proyecto de ley permita que las personas jurídicas hagan aportes a las campañas presidenciales, y menos que lo hagan hasta llegar a un tope del 4% de los gastos de las mismas. Esta posibilidad, a su parecer, resulta contraria al principio superior de igualdad electoral que debe presidir las campañas para la primera magistratura del Estado, porque admite que personas naturales con cuantiosos recursos económicos, a través de personas jurídicas, realicen aportes a las campañas, por encima del tope aplicable a las personas naturales. Además, en un régimen democrático, los derechos políticos, entre ellos el de participación política ejercido al apoyar las campañas electorales, se reconocen solamente a las personas naturales; finalmente, la posibilidad de que las personas jurídicas efectúen contribuciones a un Presidente candidato distorsiona el equilibrio que ha de imperar en las reglas de juego adoptadas por el legislador estatutario, para promover la equidad en un contexto en el cual es posible la reelección”.*

Analistas de estos temas de financiación consideran la inconveniencia para la democracia la excesiva dependencia de la financiación privada y en especial la proveniente de los grande grupos financieros ante la eventualidad de que luego cobren al candidato la inversión realizada en su campaña.

**3. OBLIGACIONES DE LOS ACTORES POLITICOS EN MATERIA DE FINANCIACIÓN.**

La Constitución exige a los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos y candidatos rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen, y destino de sus ingresos

La ley de los partidos establece las clases y contenidos de los informes que anualmente deben presentar los partidos y movimientos al Consejo Nacional Electoral, autoridad a la que le corresponde su revisión y control.

La misma ley determina las categorías de los ingresos y gastos que deben relacionarse en la respectiva rendición de cuentas, las fechas y forma de presentación de los mismos acorde con las resoluciones que sobre la materia expide el referido Consejo Electoral.

A nivel reglamentario rige la Resolución No. 0330 de 2007, expedida por el Consejo Nacional Electoral por medio de la cual se establece el procedimiento para el registro de libros y presentación de informes de ingresos y gastos de campañas electorales y consultas populares internas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y se dictan otras disposiciones.

**3.1 FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA FINANCIACIÓN**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 265 de la Constitución Política, le corresponde al consejo Nacional Electoral, en cuanto al tema que nos ocupa, ejercer las siguientes atribuciones.

Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías.

Distribuir los aportes que para el financiamiento de las campañas electorales y para asegurar el derecho de participación política de los ciudadanos, establezca la ley.

En  la ejecución de estas funciones el Consejo puede adelantar investigaciones administrativas para verificar el cumplimiento de las normas, imponer sanciones, constituir tribunales o comisiones de garantías o vigilancia, ordenar y practicar pruebas, revisar libros y documentos públicos y privados e inspeccionar la contabilidad de las entidades financieras.

En cuanto a la regulación legal vigente sobre sanciones por violación a las normas de financiación, estas corresponden a multas impuestas por Consejo Electoral, quien mediante Resolución No 0001 de 13 de enero de 2011, reajusto el valor de las mismas desde $ 9.864.891 hasta  $ 98.648.910.

La ley 996 de 2005 prevé una serie de reglas sobre el manejo de los recursos, las responsabilidades del  Gerente de campaña, acreditación de un sistema de auditoría interna y manejo de libros de contabilidad y soportes.

La referida ley señala que al Consejo Nacional Electoral le corresponde reglamentar lo referente al sistema único de información sobre contabilidad electoral, presentación de cuentas, período de evaluación de informes, contenido y publicidad de los mismos, sistema de auditoría y revisoría fiscal, y podrá adelantar en todo momento, auditorías o revisorías sobre los ingresos y gastos de la financiación de las campañas.

Con base en dichos monitoreos o a solicitud de parte, puede iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación. De comprobarse irregularidades en el financiamiento se imponen sanciones de acuerdo con la valoración que se hagan de las faltas, en el siguiente orden:

1. Multas entre el uno por ciento (1%) y el diez por ciento (10%) de los recursos desembolsados por parte del Estado para la respectiva campaña.

2. Congelación de los giros respectivos, en el entendido, según la Corte Constitucional, que la referida congelación procede una vez concluida la campaña, en el momento de la reposición de votos.

3. En caso de sobrepasar el tope de recursos permitidos, bien por recibir donaciones privadas mayores a las autorizadas, o por superar los topes de gastos, se podrá imponer la devolución parcial o total de los recursos entregados.

4. En el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política. Para interpretación de esta sanción debe tenerse en cuenta la modificación introducida al artículo 109 constitucional por el Acto Legislativo No, 01 de 2009, en el sentido que para las elecciones (no solo presidenciales) que se celebren a partir de la vigencia de dicho Acto Legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo.

**DESTINANCION DE LOS RECURSOS DE FINANCIACION ESTATAL**

La ley 1475 de 2011 estableció que los recursos prevenientes de la financiación estatal se destinaran para el cumplimiento de los fines del partido.

Los recursos deberán destinarse:

1. Para el funcionamiento de sus estructuras regionales, locales y sectoriales.

2. Para la inclusión efectiva de mujeres, jóvenes y minorías étnicas en el proceso político.

3. Para el funcionamiento de los centros y fundaciones de estudio, investigación y capacitación.

4. Para dar apoyo y asistencia a sus bancadas.

5. Para cursos de formación y capacitación política y electoral.

6. Para la divulgación de sus programas y propuestas políticas.

7. Para el ejercicio de mecanismos de democracia interna previstos en sus estatutos.

Los partidos y movimientos políticos mantienen la obligación de debatir y aprobar democráticamente sus presupuestos y el deber de informar las decisiones tomadas sobre el particular, conforme a la reglamentación que expida el Consejo Nacional Electoral.

En desarrollo de la obligación constitucional de  rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen, y destino de sus ingresos, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, dentro de los primeros cuatro meses de cada año, tienen la obligación de presentar ante el Consejo Nacional Electoral declaración de patrimonio, ingresos y gastos, utilizando para ello el formato que para tal efecto disponga esta entidad.

**FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES**

Las fuentes para la financiación de las campañas de los candidatos inscritos por los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos. Estas son:

1. Las cuotas de sus afiliados, de conformidad con sus estatutos.

2. Las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, de sus afiliados.

3. Los créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas

4. Los ingresos originados en actos públicos.

5. Los rendimientos financieros de inversiones temporales que realicen con sus recursos propios.

6. Las herencias o legados que reciban.

6. La financiación estatal, en caso de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.[[24]](#footnote-24)

**LIMITES A LA FINANCIACIÓN PRIVADA.**

Los ingresos de una campaña electoral no podrán ser superiores al monto total de los gastos de campaña; es decir, que ningún partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos, candidato o campaña, podrá obtener créditos ni recaudar recursos originados en fuentes de financiación privada, por más del valor total de gastos que se pueden realizar en la respectiva campaña.

Establece como tope para el recaudo de contribuciones y donaciones el  10% del valor total del monto de gastos permitido en la correspondiente campaña.

La financiación cuya fuente son recursos propios, del cónyuge, compañero permanente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, no está sometida a los límites individuales, lo que hace presumir que una campaña puede ser financiada en su totalidad por una cualquiera de esas fuentes. En todo caso, la sumatoria de esos aportes o créditos no podrá ser superior al monto total de gastos de campaña.

En efecto, en el caso de que una campaña quedara con obligaciones pendientes de pago, con la previa autorización del Consejo Nacional Electoral, se puedan cubrir con la condonación parcial de créditos o con recursos de fuentes de financiación privada, los  cuales no pueden sobrepasar el límite del 10% establecido como tope para las donaciones o contribuciones individuales, tales condonaciones, aportes o contribuciones no tendrán el carácter de donaciones ni los beneficios tributarios reconocidos en la ley para este tipo de donaciones.

**LIMITES AL MONTO DE GASTOS DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES**

Los fija el Consejo Nacional Electoral en el mes de enero de cada año teniendo en cuenta los costos reales de las campañas, el correspondiente censo electoral y la apropiación presupuestal para la financiación estatal de las mismas. Para el efecto debe realizar periódicos estudios con Ministerio de Hacienda y Crédito Público que reflejen el valor real de las campañas electorales.

En efecto, el monto máximo de gastos se fijará por cada candidato para el caso  de cargo uninominal o por lista de candidatos a corporaciones de elección popular.

En el caso de listas con voto preferente el monto máximo de gastos por cada uno de los integrantes de la lista será el resultado de dividir el monto máximo de gastos de la lista por el número de candidatos inscritos. Como se puede observar, este sistema conlleva a que los candidatos de las listas con menos inscritos tengan la posibilidad de invertir más recursos frente a las listas integradas por un mayor número de candidatos inscritos.

Igualmente, le corresponde al Consejo Nacional Electoral señalar el monto máximo que cada partido o movimiento con personería jurídica puede invertir en la campaña electoral institucional a favor de sus candidatos o listas.

**ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES.**

Para un mejor control y delimitar responsabilidades los recursos de las campañas electorales cuyo monto máximo de gastos sea superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales originados en fuentes de financiación privada sean administrados por gerentes de campaña designados por los candidatos a los cargos uninominales y a las corporaciones públicas cuando se trate de listas con voto preferente. Para listas cerradas el gerente lo designan de común acuerdo los candidatos o, en su defecto, el partido, movimiento o comité promotor del grupo significativo de ciudadanos.

Para al ingreso, manejo y administración de los recursos en dinero se debe  disponer de una cuenta única o subcuentas, exentas de impuestos a las transacciones bancarias, que el gerente de campaña abrirá bajo su responsabilidad en una entidad financiera legalmente autorizada.

Cada partido o movimiento político con personería jurídica podrá expedir su propia reglamentación que contenga reglas especiales para la financiación y administración de las campañas, la designación de los gerentes, y demás aspectos que consideren necesarios para garantizar la transparencia, la moralidad y la igualdad, la cual deberá ser registrada ante el Consejo Nacional Electoral para efectos del control y vigilancia que le corresponde.

El Consejo Nacional Electoral tiene el deber de reglamentar el procedimiento para la presentación de informes de ingresos y gastos de las campañas, con la precisión de las obligaciones y responsabilidades individuales de los partidos, movimientos, candidatos y gerentes de las respectivas campañas.

Los  informes consolidados de ingresos y gastos de las campañas deberán ser presentados por los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos dentro de los dos meses siguientes a la fecha de votación; por lo cual los gerentes de campaña y candidatos deberán presentar ante el respectivo partido, movimiento o grupo significativo los respectivos informes individuales de sus campañas dentro del mes siguiente a la fecha de la votación.

**PERDIDA DEL CARGO POR VIOLACION DE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA**

En desarrollo de lo prescrito en el artículo 109 constitucional que expresamente señala que la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la perdida de investidura o del cargo, la Ley consagra las siguientes reglas de procedimiento para el caso de violación de los límites al monto de gastos de las campañas:

1. En el caso de candidatos elegidos a corporaciones públicas se seguirá el procedimiento de pérdida de investidura definido en la Constitución y la ley.

2. En el caso de alcaldes y gobernadores, la pérdida del cargo será decidida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo con el procedimiento para declarar la nulidad de la elección. En este caso el término de caducidad se contará a partir de la ejecutoria del acto administrativo por medio del cual el Consejo Nacional Electoral determinó la violación de los límites al monto de gastos.

Establecida la violación de los límites al monto de gastos, al Consejo Nacional Electoral le corresponde presentar ante la autoridad competente la correspondiente solicitud de pérdida del cargo.

**FINANCIACIÓN PROHIBIDA.**

Se prohíbe las siguientes fuentes de financiación de los partidos, movimientos políticos y campañas:

1. Las que provengan, directa o indirectamente, de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras, excepto las que se realicen a título de cooperación técnica para el desarrollo de actividades distintas a las campañas electorales.

2. Las que se deriven de actividades ilícitas o tengan por objeto financiar fines antidemocráticos o atentatorios del orden público.

3. Las contribuciones o donaciones de personas titulares del derecho real, personal, aparente o presunto, de dominio, respecto de bienes sobre los cuales se hubiere iniciado un proceso de extinción de dominio.

4. Las contribuciones anónimas.

5. Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad.

6. Las que provengan de personas que desempeñan funciones públicas, excepto de los miembros de corporaciones públicas de elección popular, quienes podrán realizar aportes voluntarios a las organizaciones políticas a las que pertenezcan, con destino a la financiación de su funcionamiento y a las campañas electorales en las que participen, de acuerdo con los límites a la financiación privada previstos en la ley.

7. Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se hayan originado en más de un cincuenta por ciento de contratos o subsidios estatales; que administren recursos públicos o parafiscales, o que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar.

La financiación de los partidos y de las campañas electorales se ha constituido en uno de los instrumentos democratizadores del proceso político, en la medida en que su medio se establece las condiciones necesarias para garantizar el equilibrio del juego democrático delimitando o encauzando la influencia política de los sectores económicos predominantes.

El objetivo que se persigue con esta propuesta, es ubicar la competencia de la política en un ambiente de equilibrio necesario para que el sistema político proporcione las condiciones y las oportunidades de igualdad a los partidos y candidatos competidores.

Para que la democracia sea fortalecida, algunos analistas llegan a plantear la necesidad de desligar totalmente la actividad proselitista de los aportes económicos del sector privado, y proponen la financiación total de las campañas y de los partidos con dineros provenientes exclusivamente de las arcas públicas.

Colombia hacia una transformación en materia política del país, garantizaría la independencia de los partidos y los candidatos, en relación con los centros de poder o monopolios económicos, se garantizaría de igual manera la equidad en la asignación y la distribución de los recursos públicos entre los diversos partidos y movimientos, al tener en cuenta criterios de representatividad, gastos realizados, frente a cantidades de votos válidamente obtenidos en un certamen electoral.

Se incidiría de una forma palpable en el abaratamiento de los costos, pues al ser el Estado el proveedor de los fondos, podría concertar con los beneficiarios los rubros y los porcentajes de los gastos, aliviando el peso exagerado sobre los electores que ejerce la publicidad.

En este orden de ideas, es pertinente una propuesta de obligatoriedad del voto en Colombia, pues esto permitirá aumentar la legitimidad de los gobernantes y sus decisiones y disminuir la efectividad nociva de la maquinaria clientelista, efectos que se verán neutralizados debido a la disminución de prebendas para los potenciales electores.

En cuanto a la necesidad de instaurar el voto obligatorio para hacerle frente al clientelismo político, es necesario señalar que existe un alta relación entre los niveles de atención y el monto de los recursos, público y privados, que se destinan a movilizar las maquinarias con fines electorales, ya que se dedica en gran parte a impedir que los márgenes de abstencionismo se amplíen.

La baja participación política en el país ha llevado a que la eficiencia de la maquinaria clientelista no sea responsable ya que los partidos políticos y candidatos deben emplear mayores recursos para incentivar a los electores a ir a las urnas, relegando a un segundo plano los problemas sociales de la comunidad.

Si bien los efectos negativos que esto ha traído al país son notorios, no está de sobra un pequeño recuento de estos. La prolongación del uso de los recursos del estado como medio electoral y de negociación política; la repartición burocrática dejando tras de sí, la debilidad del Estado colombiano y su democracia; los problemas de la sociedad como una preocupación secundaria al momento de elegir a los mandatarios; el incremento en los costos del funcionamiento del sistema político; y el más grave de todos, la afección en la legitimidad y gobernabilidad de mandatarios e instituciones.

Frente a esto último, es necesario recordar que la democracia alcanza su nivel máximo de legitimidad cuando logra despertar entre las masas la necesidad de igualdad, convirtiéndose así en la forma de gobierno que genera menos temores y necesidades de inculcar miedo a sus integrantes ya que la democracia rechaza los desequilibrios.

Es por esto que es necesario enaltecer el concepto de voto, añadiendo a su carácter de expresión de opinión una función política, relevante para el buen funcionamiento de la democracia. Refiriéndose esto a que el ciudadano además de expresar sus preferencias políticas con el voto promueve el funcionamiento de la vida política estatal, de la democracia. Es por esto que se considera que el carácter voluntario del voto pasa a un segundo plano, imponiendo su carácter de deber ciudadano.

Frente a esto, el Tribunal Supremo de España (del 20 de diciembre de 1990; citado en López Guerra *et ál.,*1991:265) declaró que la función pública del sufragio supone que *“el derecho de sufragio presenta a su vez como reverso su aspecto de obligación ciudadana, sobre cuyo ejercicio descansa la entera arquitectura del sistema democrático”.*

Teniendo en cuenta esto y el constante interrogante sobre si el voto obligatorio coarta la libertad del individuo, en el sentido de que el voto es un derecho y de igual forma votar o no es una decisión personal. Sin embargo, el salir a votar se convierte igualmente en un deber al considerar la función política de voto mencionada anteriormente.

Cabe mencionar, que el voto obligatorio no coarta la libertad del ciudadano ya que solo se le obliga a participar en la elección mas no en la manera de votar del elector, es decir no se ejerce ningún tipo de influencia en su voto. Lo anterior se pude resumir en que la medida obliga a asistir a votar mas no al sufragio, ya que el ciudadano debe expresarse a través del voto pero el contenido de su elección es autónomo, permitiendo así que el elector tenga la capacidad plena de elegir en completa libertad, si ninguna opción le satisface, este puede votar en blanco.

En las democracias occidentales han existido diferentes debates en los que se enfrenta el voto facultativo ante el voto obligatorio en los cuales el primero, entendido como el voto libre, expresión de la soberanía popular, ha ganado las controversias. Sin embargo, es necesario señalar que el voto obligatorio se fundamenta en la soberanía nacional, la cual concibe el sufragio como una función pública, responsabilidad del ciudadano. He ahí el fundamento teórico-jurídico del voto obligatorio, el cual reside en que existe una función social de los derechos subjetivos, cuya obligatoriedad puede ser dispuesta por el Estado en la medida en que el interés social que en él se manifiesta así lo indique.

Frente a la discrepancia de diferentes analistas ante la instauración de la obligatoriedad del voto, el ministro de relaciones exteriores, francés, Laurent Fabius, plantea que existen otros deberes de obligatorio cumplimiento en la democracia como lo son, pagar impuestos o ser jurado electoral, que son cumplidos en aras del buen funcionamiento del sistema.

Implementar esta medida tendrá un gran impacto en el futuro de la vida democrática de Colombia, garantizando que todos los ciudadanos aptos para votar participen de las decisiones que trascienden en el país. En este sentido el proyecto no se trata solo de aumentar el número de electores, sino de otorgar legitimidad a los procesos políticos, a los mandatarios electos y a las instituciones.

Ante algunos integrantes de las Comisiones Primera de Senado y Cámara con ocasión a la presentación del Proyecto de Reforma Política el pasado miércoles 03 de septiembre, el Señor Presidente de la República expreso su complacencia y beneplácito por instaurar esta figura en nuestro País, siendo muy enfático en que se implemente de manera transitoria “10 años”. Esto en el fin único y exclusivo de inculcar e incrementar con la obligatoriedad del voto la cultura participativa de los colombianos y consolidar en los próximos años el derecho fundamental del ciudadano a elegir y ser elegido.

Por esta razón el Representante a la Cámara HERIBERTO SANABRIA ASTUDILLO, en su condición de Autor de uno de estos Actos Legislativos y Coordinador Ponente, ha incluido en la exposición de motivos y en su pliego de modificaciones una nueva redacción en el artículo que corresponde a la vigencia, recogiendo así el querer y sentir del Señor Presidente de la República.

Por las razones anteriormente expuestas, consideramos necesaria y pertinente la implementación del voto obligatorio en Colombia, esto como ya se argumentó, en pro del buen funcionamiento de la democracia.

**PLIEGO DE MODIFICACIONES**

1. El Titulo del Proyecto será el siguiente:

**Proyecto de Acto Legislativo “POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL VOTO OBLIGATORIO EN COLOMBIA”**

1. Se elimina el artículo 1 del **Proyecto de Acto Legislativo Nº 038 de 2014.**
2. Se redacta nuevamente el artículo 1 del **Proyecto de Acto Legislativo Nº 008 de 2014 Cámara,**  el cual quedara así:

**Artículo 1°.** Modifíquese el artículo 258 de la Constitución Política, el cual quedara así:

**ARTICULO 258.** El voto es un deber del ciudadano y una función pública, universal y obligatoria. El Estado velará porque en todas las elecciones se ejerza sin ningún tipo de coacción y los ciudadanos voten secretamente en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos.

En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio del voto, igualmente implementara las sanciones pertinentes para los ciudadanos que incumplan este deber.

**PARÁGRAFO 1º.** Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral.

**PARÁGRAFO 2º.** Se implementara el voto electrónico para lograr agilidad y transparencia en todas las votaciones.

1. Se redacta nuevamente el articulo Nro. 2, en lo concerniente a la Vigencia en el siguiente tenor:

**Artículo 2.** Vigencia - La presente Ley rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación y su aplicabilidad será solamente por 10 años en todo el Territorio Nacional.

**HERIBERTO SANABRIA ASTUDILLO CARLOS EDWARD OSORIO AGUIAR**

**Coordinador Ponente Coordinador Ponente**

**MIGUEL ANGEL PINTO CARLOS ABRAHAM JIMENEZ LOPEZ**

**Coordinador Ponente Coordinador Ponente**

**ALVARO HERNAN PRADA A. ANGELICA LISBETH LOZANO CORREA**

**Ponente Ponente**

**CARLOS GERMAN NAVAS TALERO FERNANDO DE LA PEÑA MARQUEZ**

**Ponente Ponente**

**JOSE RODOLFO PEREZ SUAREZ**

**Ponente**

**TEXTO DEFINITIVO**

**al Proyecto de Acto Legislativo “POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL VOTO OBLIGATORIO EN COLOMBIA”**

**EL Congreso de Colombia**

**DECRETA:**

**Artículo 1°.** Modifíquese el artículo 258 de la Constitución Política, el cual quedara así:

**ARTICULO 258.** El voto es un deber del ciudadano y una función pública, universal y obligatoria. El Estado velará porque en todas las elecciones se ejerza sin ningún tipo de coacción y los ciudadanos voten secretamente en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos.

En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre

ejercicio del voto, igualmente implementara las sanciones pertinentes para los ciudadanos que incumplan este deber.

**PARÁGRAFO 1º.** Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral.

**PARÁGRAFO 2º.** Se implementara el voto electrónico para lograr agilidad

y transparencia en todas las votaciones.

**Artículo 2°.** *Vigencia*. La presente Ley rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación y su aplicabilidad será solamente por 10 años en todo el Territorio Nacional.

**HERIBERTO SANABRIA ASTUDILLO CARLOS EDWARD OSORIO AGUIAR**

**Coordinador Ponente Coordinador Ponente**

**MIGUEL ANGEL PINTO CARLOS ABRAHAM JIMENEZ LOPEZ**

**Coordinador Ponente Coordinador Ponente**

**ALVARO HERNAN PRADA A. ANGELICA LISBETH LOZANO CORREA**

**Ponente Ponente**

**CARLOS GERMAN NAVAS TALERO FERNANDO DE LA PEÑA MARQUEZ**

**Ponente Ponente**

**JOSE RODOLFO PEREZ SUAREZ**

**Ponente**

**PROPOSICIÓN**

Apruébese en **PRIMER DEBATE** el Pliego de Modificaciones y el Texto Definitivo del Proyecto deActo Legislativo “POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL VOTO OBLIGATORIO EN COLOMBIA”

A vuestra consideración,

**HERIBERTO SANABRIA ASTUDILLO CARLOS EDWARD OSORIO AGUIAR**

**Coordinador Ponente Coordinador Ponente**

**MIGUEL ANGEL PINTO CARLOS ABRAHAM JIMENEZ LOPEZ**

**Coordinador Ponente Coordinador Ponente**

**ALVARO HERNAN PRADA A. ANGELICA LISBETH LOZANO CORREA**

**Ponente Ponente**

**CARLOS GERMAN NAVAS TALERO FERNANDO DE LA PEÑA MARQUEZ**

**Ponente Ponente**

**JOSE RODOLFO PEREZ SUAREZ**

**Ponente**

1. Artículo 4º Constitución Nacional de 1821. [↑](#footnote-ref-1)
2. Artículo 12º Constitución Nacional 1821. [↑](#footnote-ref-2)
3. Jaime Humberto Borja. Nueva Granada a la Gran Colombia. [↑](#footnote-ref-3)
4. Articulo 1º Constitución Nacional de 1853. [↑](#footnote-ref-4)
5. Articulo 13 Constitución Nacional de 1853. [↑](#footnote-ref-5)
6. Articulo 15 Constitución Nacional de 1853. [↑](#footnote-ref-6)
7. Economía y Nación: una breve historia de Colombia. Bogotá, Universidad Nacional, siglo XXI, 1985. [↑](#footnote-ref-7)
8. Fernando Cepeda Ulloa (comp. ley estatutaria), Instituciones y mecanismos de participación ciudadana, Universidad de los Andes, Bogotá, 1994. [↑](#footnote-ref-8)
9. Miguel Ceballos y Gerard Martín, Participación y fortalecimiento institucional a nivel local en Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2001. Se trata de un trabajo en el cual se hace un listado de los canales y de los instrumentos formales de participación en el ámbito local y donde se presentan, también, el marco legal de esos canales y se describen en forma detallada algunos de ellos. También se describen los instrumentos nacionales, departamentales y municipales para la promoción de la participación. Sobre este tema también se puede consultar el Documento Conpes 2779, de 1995. El libro tiene 313 páginas. [↑](#footnote-ref-9)
10. Manuel José Cepeda, *La Constitución de 1991 ante nuestra realidad. Respuesta a algunas críticas*, Cátedras de Grado-Esap, Bogotá, 1992. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Gaceta del Congreso*, Cámara de Representantes, año IX, No. 98, 5 de abril de 2000, p. 5. [↑](#footnote-ref-11)
12. “Proyecto de Ley 261 de 2000 Cámara” en *Gaceta del Congreso,* año IX, No. 98, 5 de abril de 2000. [↑](#footnote-ref-12)
13. Luis Antonio Corona Derecho Comparado, 2012. [↑](#footnote-ref-13)
14. John Stuart Mil. Considerations on Representative Government – Oxford University Press, 1975. [↑](#footnote-ref-14)
15. I. Seminario El estado de Derecho. [↑](#footnote-ref-15)
16. www.registraduria.gov.co [↑](#footnote-ref-16)
17. Observatorio de Procesos Electorales. Facultad de Ciencia Política y Gobierno, Universidad de Rosario.

    *Patrones departamentales del comportamiento electoral: el caso del Senado* [↑](#footnote-ref-17)
18. Artículo 109 Constitución Política de Colombia [↑](#footnote-ref-18)
19. Artículo 109 Constitución Política y Artículos 14 y 39 de la Ley 130 de 1994. [↑](#footnote-ref-19)
20. Artículo 13, Ley 130 de 1994. [↑](#footnote-ref-20)
21. Artículo 14, Ley 130 de 1994 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ley 1475 de 2011 [↑](#footnote-ref-22)
23. Articulo 22 Ley 1475 de 2011 [↑](#footnote-ref-23)
24. Artículo 16 ley 1475 de 2011 [↑](#footnote-ref-24)